

JOSÉ SEOANE*, EMILIO TADDEI**
Y CLARA ALGRANATI***

LAS NUEVAS CONFIGURACIONES DE LOS MOVIMIENTOS POPULARES EN AMÉRICA LATINA¹

NEOLIBERALISMO Y CONFLICTO SOCIAL

Los años noventa abrieron paso a una renovada mundialización capitalista en su forma neoliberal cuyo impacto en América Latina ha sido por demás notorio y profundo. Prolongando un proceso iniciado en las décadas anteriores, auspiciado ahora por el llamado Consenso de Washington, la adopción de las políticas neoliberales hubo de generalizarse en toda la región para asumir una nueva radicalidad. Los gobiernos de Carlos Menem (Argentina), Alberto Fujimori (Perú), Salinas de Gortari (México), Collor de Mello y luego Fernando H.

* Coordinador del Observatorio Social de América Latina (OSAL) del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

** Coordinador Académico del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

*** Integrante del Equipo de Coordinación del OSAL-CLACSO.

¹ Agradecemos especialmente los comentarios de Ivana Brighenti y Miguel Ángel Djanikian en la revisión del texto.

Cardoso (Brasil), resultaron algunas de sus más conocidas encarnaciones presidenciales. Las profundas y regresivas consecuencias en términos sociales y democráticos que la aplicación de estas políticas supuso (de las cuales la pauperización de masas es una de sus expresiones más trágicas) fueron el resultado de las agudas transformaciones estructurales que modificaron la geografía societal de los capitalismo latinoamericanos en el marco del nuevo orden que parecía imponer la llamada “globalización neoliberal”².

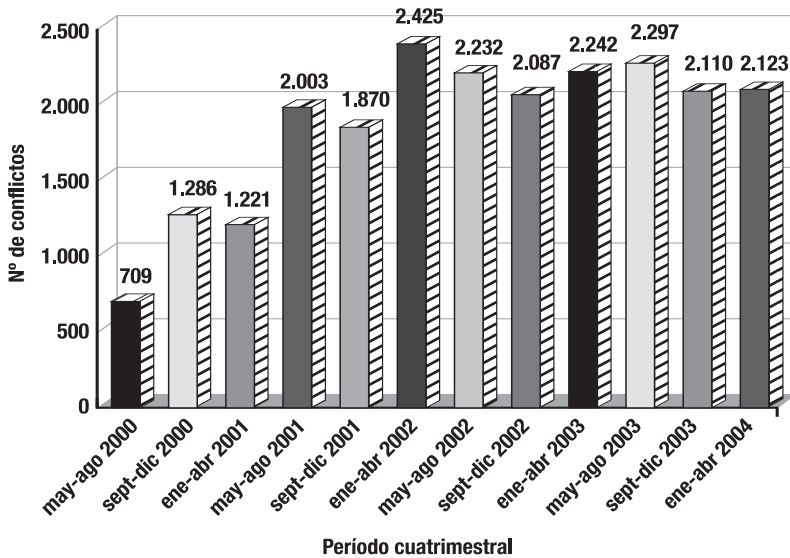
La aplicación de estas políticas enfrentó ciertamente numerosas resistencias y protestas en la región. Valga mencionar que en la primera mitad de la década del noventa dos presidentes latinoamericanos (Collor de Mello en Brasil y Carlos Andrés Pérez en Venezuela) debieron abandonar de manera “imprevista” sus cargos como resultado, entre otras cuestiones, del creciente malestar y repudio social. Sin embargo, en el contexto regional, las resistencias a la aplicación del recetario neoliberal en esos años presentaron una configuración mucho más fragmentada en términos sociales y más localizada en términos sectoriales y territoriales que las precedentes, al tiempo que en la mayoría de los casos resultaron incapaces de obstaculizar la implementación de dichas políticas. En el terreno de las disciplinas sociales, este proceso, mediado por la hegemonía conquistada por el pensamiento único y sus formulaciones sobre “el fin de la historia”, significó el desplazamiento de la problemática del conflicto y de los movimientos sociales del espacio relativamente central que la misma había tenido en las décadas pasadas –aunque desde perspectivas diferentes– a un lugar casi marginal y empobrecido.

Sin embargo, hacia el final de dicha década, la realidad social latinoamericana aparece nuevamente signada por el incremento sostenido de la conflictividad social. La continuidad de este proceso puede apreciarse en el relevamiento realizado por el Observatorio Social de América Latina (OSAL-CLACSO) para 19 países de la región latinoamericana (ver Gráfico 1) que muestra, para el período que va de mayo-agosto de 2000 a igual cuatrimestre de 2002, un crecimiento de los hechos de conflicto relevados del orden de más del 180%. Por la magnitud regional que alcanza (más allá de las excepciones y diferencias

2 No tenemos posibilidad, en este caso, de desarrollar esta cuestión. Sobre la evolución de la pobreza y el desempleo en América Latina pueden consultarse los informes sobre Desarrollo Humano del PNUD (2002) y de la CEPAL (2002). Sobre las consecuencias en relación con la democracia, ver Boron (2003a). Sobre las transformaciones estructurales del capitalismo latinoamericano ver, entre otros, Quijano (2004) y Fiori (2001).

nacionales), por las características que presenta, y por su perdurabilidad, este incremento de la conflictividad social da cuenta de la aparición de un nuevo ciclo de protesta social que, inscribiéndose en el campo de fuerzas resultante de las regresivas transformaciones estructurales forjadas por la implantación del neoliberalismo en nuestros países, emerge en contestación a estas.

GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN AMÉRICA LATINA
MAYO DE 2000/ABRIL DE 2004



Fuente: elaboración del Observatorio Social de América Latina (OSAL) en base a un relevamiento.

En algunos casos se ha señalado como acontecimiento emblemático del despertar de este ciclo al levantamiento zapatista de principios de 1994. Dicha referencia resulta significativa en la medida en que, desde diferentes puntos de vista, la revuelta de los indígenas chiapanecos presenta algunos de los elementos que distinguen a los movimientos sociales que habrán de caracterizar la realidad político-social de la región en los últimos años. En este sentido, el impacto nacional e internacional del levantamiento zapatista habrá de dar cuenta de la emergencia de movimientos de origen rural constituidos a partir de su identidad indígena, de la demanda democrática de los derechos colectivos de estos

pueblos –que en su reivindicación de autonomía cuestiona las bases constitutivas del estado-nación–, del reclamo de una democratización radical de la gestión político-estatal, así como de la convocatoria a convergencias continentales y globales. Más allá de la especificidad de las referencias que acompañan y caracterizan al zapatismo, su emergencia alumbró, en un sentido más general, algunas de las particularidades que parecen distinguir a la mayoría de los movimientos populares que ocupan el escenario cada vez más intenso de la conflictividad social en la región, tanto por sus características organizativas como por sus formas de lucha, sus inscripciones identitarias, sus conceptualizaciones de la acción colectiva, y sus entendimientos en relación al poder, la política y el estado. No se trata solamente entonces del inicio de un nuevo ciclo de protestas sociales, sino también de que el mismo aparece encarnado en sujetos colectivos con características particulares y diferentes de aquellos que habían ocupado la escena pública en el pasado. Por otra parte, estas experiencias y el incremento de la protesta social en América Latina habrán de desarrollarse de manera casi simultánea al crecimiento del conflicto en otras regiones del planeta, en un proceso que signará la constitución de un espacio de convergencia internacional en oposición a la mundialización neoliberal, aquello que los medios de comunicación masivos han bautizado como movimiento “antiglobalización” o “globalifóbico” y que, siendo más precisos, puede llamarse movimiento “altermundialista”.

Por último, vale señalar que este crecimiento de la protesta social y la emergencia y consolidación de nuevos movimientos sociales y populares convergieron en diferentes procesos de confrontación social que, alcanzando una amplia significación nacional, conllevaron en los últimos años, en algunos casos, la caída de gobiernos, la apertura de profundas crisis políticas o el fracaso de iniciativas de carácter neoliberal. En este sentido, la “Guerra del Gas” en Bolivia (2003), que culmina con la renuncia del gobierno del presidente Sánchez de Lozada y la apertura de una transición aún en curso, aparece inscrita en este proceso de movilización societal que se inicia con la “Guerra del Agua” en Cochabamba (2000), expresándose también en las luchas del movimiento cocalero de la región del Chapare y del movimiento indígena en el Altiplano. Asimismo, el levantamiento indígena en Ecuador (2000), que culmina con la caída del gobierno de Jamil Mahuad, marcará la consolidación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en el escenario de la contestación social a las políticas neoliberales en dicho país.

Por otra parte, la emergencia y extensión del movimiento de trabajadores desocupados en Argentina y las protestas de los trabajadores del sector público en la segunda mitad de la década del noventa convergerán con la movilización de amplios sectores urbanos de capas medias para desencadenar la renuncia del gobierno del presidente de la Rúa en los finales de 2001. En el caso de Brasil vale resaltar la constitución de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT, 1983) y del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST, 1984) que protagonizaron la contestación a las políticas neoliberales y estuvieron en la base del triunfo electoral de la candidatura presidencial de Lula da Silva (2002). En la misma dirección, las movilizaciones campesinas en Paraguay, que habrían de jugar un rol importante en la caída del presidente Cubas Grau (1999), se prolongarán en la confrontación con las políticas neoliberales impulsadas por los gobiernos posteriores; así como las intensas protestas sociales en Perú (particularmente la experiencia de los Frentes Cívicos regionales), que signarán el fin del régimen de Fujimori (2000), habrán de continuarse en las resistencias a las políticas privatistas impulsadas por el gobierno del presidente Toledo (2002-2003).

Fue precisamente en base a la importancia de estos procesos que, a inicios de 2000, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) decidió crear el programa Observatorio Social de América Latina (OSAL) con el objetivo de promover el seguimiento de la conflictividad social y los estudios sobre los movimientos sociales, así como el intercambio y debate regional sobre estas temáticas. Durante estos más de cuatro años, la labor desarrollada por el OSAL fructificó en la realización de una cronología de los hechos de conflicto social para 19 países del continente así como en la elaboración de una publicación cuatrimestral que –con la participación de numerosos investigadores latinoamericanos– ha abordado el análisis y la reflexión colectiva alrededor de las principales protestas y movimientos sociales destacados en la escena regional a lo largo de estos últimos años. Las principales conclusiones y señalamientos que se desprenden de esta prolongada tarea alimentan la presente contribución.

En este sentido, el objetivo inicial de este artículo consistirá en ofrecer una aproximación a la configuración particular que caracteriza a este ciclo de protestas y a los movimientos populares que lo protagonizan. En la primera parte del mismo intentamos abordar esta cuestión a partir de una descripción general que presenta la conflictividad social reciente en la región, sus características más sobresalientes

tes y los sujetos que la encarnan, para concluir en el señalamiento de algunos elementos que parecen distinguir la experiencia y acción de los movimientos sociales más destacados. Un análisis más profundo de los mismos alienta el trabajo de la segunda parte del artículo.

EL ESCENARIO CONTEMPORÁNEO DE LA PROTESTA SOCIAL EN AMÉRICA LATINA

Hemos señalado ya que el nuevo ciclo de protestas que cobra impulso hacia fines de la década del noventa y los movimientos sociales que lo protagonizan presentan características distintivas que los diferencian de aquellos de los años sesenta y setenta. El primer hecho evidente nos indica que la mayoría de las organizaciones sociales que promueven estas protestas han surgido o sido refundadas en las dos últimas décadas. Pero no se trata sólo de una cuestión que remite exclusivamente a la vida o historia organizacional de estos movimientos, sino particularmente a la configuración que estos asumen y que los distingue incluso del mapa de la conflictividad social que caracterizó a los años ochenta y principios de los noventa.

En este sentido, si hasta, por lo menos, fines de la década del ochenta el conflicto asalariado keynesiano-fordista (y particularmente el conflicto industrial) constituyó uno de los ejes destacados de la conflictividad social en la región, siendo además la forma de organización sindical el modelo que signó –de una u otra manera– la nervadura organizativa de la mayoría de los movimientos sociales urbanos y rurales, y que a la vez cumplió un destacado papel en la articulación político-societal de las demandas particulares de los sujetos colectivos, las transformaciones estructurales que el neoliberalismo impuso sobre todos los órdenes de la vida social (y en particular en la economía y el mercado de trabajo bajo los procesos de desindustrialización y financiarización económica) habrán de poner en crisis dicha matriz de la acción colectiva y debilitarán (aunque no habrán de eliminar) el peso de los sindicatos de asalariados como sujetos privilegiados del conflicto. Por contrapartida, resultado del proceso de concentración del ingreso, la riqueza y los recursos naturales que signa a las políticas neoliberales, nuevos movimientos sociales de base territorial tanto en el mundo rural como también en el espacio urbano han emergido en el escenario latinoamericano, constituyéndose en algunos casos, por ejemplo, en relación a su identidad étnico-cultural (los movimientos indígenas) o en referencia a su carencia (los llamados

“movimientos sin”, por ejemplo los sin tierra, sin techo o sin trabajo) o en relación a su hábitat de vida compartido (por ejemplo los movimientos de pobladores).

Así pues, el modelo de reprimarización económica y la centralidad que en este contexto asumen los procesos de reestructuración agraria tienen como contrapartida la emergencia de destacados movimientos de origen rural. En la misma dirección opera también la privatización y explotación intensiva de los recursos naturales que conmueve y trastoca la vida de numerosas comunidades rurales. Este es sin duda uno de los elementos distintivos de la nueva fase que analizamos y que cristaliza particularmente en el protagonismo de los movimientos indígenas, especialmente en Ecuador, México y Bolivia. Estos movimientos alcanzan una importante influencia a nivel nacional e internacional que trasciende las reivindicaciones sectoriales para llegar a cuestionar tanto la política económica neoliberal y la legitimidad política de los gobiernos que la impulsan así como la forma constitutiva del estado-nación en América Latina. En este sentido, por ejemplo en el caso ecuatoriano, el movimiento indígena ha pugnado por el reconocimiento de un proyecto político que, reflejado en la reivindicación de un estado plurinacional, busca garantizar el autogobierno de las diferentes nacionalidades indígenas. Bajo una reivindicación de la autonomía aún más radical, la experiencia del movimiento zapatista reclama el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas que, cristalizados parcialmente en los llamados Acuerdos de San Andrés (1995), habrán de inspirar la “caravana por la dignidad” que recorrerá buena parte de México en los primeros meses de 2001 en reclamo de su cumplimiento. A este breve señalamiento debe sumarse la acción de los movimientos indígenas del Altiplano boliviano (y también, aunque en menor medida, del lado peruano) así como los llamados “movimientos cocaleros” protagonizados por los campesinos aymaras del Chapare y la región de los Yungas en Bolivia y en el sur de Perú contra la política de erradicación del cultivo de la hoja de coca que encarna las exigencias del gobierno norteamericano. La prolongada acción de los pueblos mapuches del sur chileno (particularmente corporeizada en la llamada Coordinadora Arauco-Malleco) contra la apropiación de sus tierras y la sobreexplotación de los recursos naturales, así como en el Valle del Cauca colombiano, son otros destacados ejemplos de este tipo de luchas que parecen desplegarse en toda la región latinoamericana. Vale destacar también el impulso que cobra a partir de 2002 la oposición de los pueblos origi-

narios de Mesoamérica contra el Plan Puebla Panamá, destinado a acelerar la penetración del capital y las inversiones transnacionales en Centroamérica.

La aparición y consolidación de estos movimientos indígenas en la escena político-social de la región va acompañada también por la emergencia de numerosos movimientos campesinos que alcanzan una significativa presencia tanto a nivel nacional como regional. En este sentido se destaca la experiencia del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) brasileño. Las sostenidas ocupaciones de tierra y de edificios públicos en demanda de una reforma agraria progresiva e integral, sus acciones contra la difusión del modelo de agricultura transgénica y el desarrollo de los llamados “asentamientos”, han transformado al MST en uno de los movimientos sociales de mayor relevancia política en la región. Su experiencia ejemplifica un proceso de creciente movilización y organización de los sectores rurales a nivel regional que toma cuerpo en la difusión de movimientos sin tierra en otros países latinoamericanos (por ejemplo, en Bolivia y Paraguay) y en la intensificación de las luchas campesinas en México, Paraguay y Centroamérica, así como en su capacidad de convocar también a los pequeños productores castigados por las políticas de liberalización del sector agrícola llevadas adelante bajo la promoción de los acuerdos de libre comercio. En la misma dirección vale señalar también el crecimiento de las protestas y los procesos de convergencia experimentados en el campo contra las consecuencias económicas y sociales que provocan en estos sectores la caída de los precios internacionales de numerosos productos agrícolas, las políticas crediticias draconianas y las barreras arancelarias vigentes para este tipo de productos en los países industrializados.

Por otra parte, en el espacio urbano, los efectos estructurales del desempleo acarreados por las políticas neoliberales han significado –fundamentalmente en países del Cono Sur– la aparición y consolidación de movimientos de trabajadores desocupados. Argentina aparece en ese sentido como el caso más emblemático de este fenómeno, donde estos movimientos que reciben el nombre de piqueteros³ ocupan –principalmente a partir de 1999– un lugar central en el escenario de la protesta antineoliberal y en la aceleración de la crisis político-social que desembocó en la renuncia del presidente Fernando de la Rúa en diciembre de 2001.

3 Los piquetes son bloqueos de calles o rutas, generalmente por un extenso período.

Por otro lado, las ciudades latinoamericanas se han visto sometidas a profundos procesos de reconfiguración espacial y social por el impacto de las políticas liberales. Los procesos de “descentralización municipal” instrumentados al calor de los ajustes fiscales (con el objetivo de “aliviar” la responsabilidad de los gobiernos centrales de transferir recursos a las administraciones locales) han tenido enormes consecuencias en la vida cotidiana de los habitantes de las ciudades. Los procesos de fragmentación y dualización del espacio urbano, abandono de los espacios públicos, deterioro de los servicios y difusión de la violencia son sólo algunas de las consecuencias más visibles de esta profunda transformación socio-espacial que tuvo lugar en las ciudades de la región. Los conflictos urbanos recientes parecen dar cuenta de esta multiplicidad de problemáticas derivadas de la polarización social impulsada por el neoliberalismo. Las luchas por el acceso a la vivienda (movimientos sin techo), por el mejoramiento de los servicios públicos y contra el alza de tarifas de los mismos, por la defensa de la escuela pública, y contra las políticas de descentralización, presentan también, en numerosos casos, la confluencia de diversos sectores sociales. El flagelo ocasionado por las catástrofes naturales (terremotos, ciclones, inundaciones), agudizado por el creciente impacto ecológico del desarrollo capitalista actual, así como el abandono de las poblaciones urbanas frente a la necesidad de ayuda oficial e inversión en infraestructura, explican las numerosas movilizaciones en reclamo de asistencia de los gobiernos locales y nacionales.

La importancia alcanzada por estos movimientos de base territorial que reseñamos brevemente, sin embargo, está lejos de significar la desaparición del conflicto de los trabajadores asalariados urbanos. No solamente porque en muchos de estos movimientos puede distinguirse la presencia de trabajadores en las difusas y heterogéneas formas que esta categoría asume bajo el neoliberalismo, que resulta en procesos de “reidentificación en términos no vinculados a la relación entre capital y trabajo, sino en otros muy distintos, entre los cuales los criterios de ‘pobreza’ y ‘etnicidad’, de oficios y de actividades ‘informales’ y de comunidades primarias son, probablemente, los más frecuentes” (Quijano, 2004). La constatación que resulta del seguimiento de los conflictos sociales en América Latina realizado por el OSAL es que el mundo del trabajo, y particularmente en el espacio urbano, lejos de ser un sujeto secundario de la práctica reivindicativa, ocupa un lugar destacado en el mapa de la protesta social, representando más de un tercio de los conflictos relevados a lo largo del período que va desde

mayo de 2000 a diciembre de 2003. Sin embargo, este peso cuantitativo en el registro de las protestas contrasta con las dificultades que las mismas (y las organizaciones sindicales que las impulsan) tienen para trascender su carácter sectorial y alcanzar una dimensión nacional, y señala una redefinición en favor de un significativo protagonismo de los trabajadores del sector público que corporeizan alrededor de tres cuartos del total de estas protestas⁴.

Estas luchas de los asalariados públicos se despliegan frente a las reiteradas políticas de reforma y privatización alentadas por las políticas neoliberales, en particular como resultado de la puesta en práctica de paquetes de ajuste fiscal exigidos y negociados por los gobiernos con los organismos internacionales. En este sector guarda particular relevancia la dinámica de los maestros y profesores cuyas reivindicaciones refieren fundamentalmente al aumento salarial, el pago de sueldos pendientes, el incremento del presupuesto educativo, el rechazo de las propuestas de reforma educativa (en particular, a la flexibilización de las condiciones laborales). En algunos países, las acciones que resultan de la oposición a la privatización de la educación pública permiten la convergencia con sectores estudiantiles (en el ámbito universitario) así como con otros sectores (padres de alumnos, por ejemplo) que, apoyando los reclamos docentes y participando en la defensa de la educación pública, parecen señalar la aparición de la forma “comunidad educativa” en el desarrollo de estos conflictos (OSAL, 2003).

Cabe señalar también la intensa práctica reivindicativa de los empleados administrativos que se movilizan en contra de despidos, por aumentos salariales o haberes adeudados y contra la reforma del estado. También en el sector público, vale remarcar los conflictos protagonizados por los trabajadores de la salud en numerosos países por reclamos salariales, por incremento de presupuesto destinado al hospital público y al sistema sanitario en general, y por la mejora de las condiciones de trabajo. Es interesante destacar que las formas de protesta en el sector mencionado adoptan recurrentemente la modalidad de paros prolongados –incluso por tiempo indeterminado– y se articulan tanto en la forma de huelgas nacionales y regionales convocadas por las centrales sindicales (en casi todos los países se registran de modo recurrente) como en procesos de movilización callejera. En el

4 Por ejemplo, para el año 2003, los conflictos protagonizados por los trabajadores del sector público, según los registros suministrados por el OSAL, representan un 76% del total de protestas de los trabajadores ocupados.

mismo sentido vale también destacar los conflictos contra la privatización de empresas públicas.

Pero si la ola privatizadora de “primera generación” emprendida a inicios de los noventa por algunos gobiernos de la región se caracterizó por una resistencia social liderada fundamentalmente por los sindicatos y los trabajadores de los sectores implicados, las luchas contra las privatizaciones de “segunda generación” aparecen en algunos casos como un momento de agregación social de la protesta que se pone de manifiesto a través de la emergencia de espacios de convergencia político-social de carácter amplio. En el primero de los casos, donde estas protestas quedaron restringidas a los trabajadores y no pudieron conformar frentes sociales más amplios que trascendieran las reivindicaciones particulares, las mismas fueron en general derrotadas. Circunscripto el conflicto a los empleados de dichas empresas, luego de la privatización buena parte de los mismos fueron licenciados y pasaron a engrosar las filas de desocupados. El nuevo ciclo de protestas sociales que analizamos parece mostrar, por el contrario, un cambio en relación a esta cuestión. Algunos ejemplos recientes, como las protestas impulsadas por el Frente Cívico de Arequipa, en el sur del Perú, contra la venta de las empresas públicas del servicio eléctrico (2002), y por el Congreso Democrático del Pueblo en Paraguay por la derogación de la ley que habilitaba la privatización de empresas del estado (2002), sirven para ilustrar la amplia convergencia de sectores sociales en coordinadoras contra las privatizaciones (federaciones campesinas, sindicatos, estudiantes, ONGs y partidos políticos) cuyas luchas resultan provisoriamente exitosas y obligan a los gobiernos a dar marcha atrás en sus intenciones privatistas⁵. Este tipo de protestas asumen a menudo una marcada radicalidad en sus formas (levantamientos urbanos, cortes prolongados de ruta, toma y ocupación de instalaciones de las empresas), que parece acompañar una tendencia confrontativa de las acciones que caracteriza al actual ciclo de protestas que atraviesa la región. Por otra parte, la denuncia contra la corrupción y la demanda de mayor participación democrática y transparencia en la vida política local han impulsado a los pobladores de las ciudades a manifestar su des-

5 Sin duda el antecedente más importante de este tipo de protestas es la llamada “Guerra del Agua” en Cochabamba, Bolivia (2000), que frustró el intento de concesionar y privatizar el servicio de agua potable en dicha ciudad a un consorcio internacional encabezado por la empresa Bechtel.

contenido promoviendo también procesos de convergencia multisectorial bajo la forma de puebladas o de movilizaciones comunitarias.

Si en décadas pasadas la participación y movilización juvenil en América Latina se canalizó en gran medida a través de la fuerte presencia del movimiento estudiantil universitario, la protesta de los jóvenes parece adoptar nuevas formas y canales de expresión. El descenso en los niveles de escolarización, resultante de los efectos combinados del proceso de privatización educativa y de la concentración del ingreso y el crecimiento de la pobreza, quizás permita explicar, entre otras causas, la pérdida de peso relativo de los movimientos estudiantiles. Si bien los estudiantes constituyen aún un sector dinámico en el escenario de la conflictividad social, inclusive activamente involucrados en protestas multisectoriales que traspasan las reivindicaciones educativas, la expresión del descontento juvenil se canaliza también a través de un activo involucramiento en los movimientos de desocupados, de jóvenes de las *favelas* en Brasil, en corrientes y colectivos culturales alternativos de diversa índole, en movimientos de derechos humanos, en las protestas indígenas y campesinas y en colectivos sindicales de trabajadores jóvenes precarizados. Las nuevas generaciones juveniles han tenido una activa y destacada participación en las masivas protestas de carácter político que desembocaron en la renuncia de presidentes o que cuestionaron de forma radical la implementación de políticas de ajuste y las privatizaciones, relativizando así las visiones estereotipadas de la realidad que dan cuenta de un marcado desencanto juvenil respecto de la participación política en sentido amplio. En el mismo contexto, es necesario resaltar la importante presencia y protagonismo que ocupan las mujeres en los movimientos sociales reseñados. Las figuras femeninas se destacan también en la constitución de estos movimientos territoriales (Zibechi, 2003), apareciendo así reflejadas tanto en el papel destacado que alcanzan las mujeres piqueteras, zapatistas e indígenas, como en la revitalización y reformulación de las corrientes feministas de décadas pasadas que cristalizó, entre otras experiencias, en la llamada “marcha mundial de las mujeres” y en la referencia a la “feminización de la pobreza” (Matte y Guay, 2001).

Por último, en el escenario actual de la protesta social latinoamericana guardan particular relevancia los procesos de convergencia regional e internacional que han cobrado gran impulso en los últimos años y constituyen, por su amplitud e inserción geográfica y su nivel de convocatoria en términos de movimientos y colectivos sociales, una experiencia sin precedentes en el continente. En el pasado, las expe-

riencias de coordinación internacional de movimientos sociales tuvieron sus expresiones más destacadas en el ámbito de las organizaciones sindicales o de sectores estudiantiles universitarios. Estas convergencias estaban fundamentalmente centradas en la defensa de intereses sectoriales y/o profesionales, hecho que suponía grandes dificultades para trascender el ámbito reivindicativo específico. El impacto y consecuencias de la “globalización neoliberal” y, consecuentemente, la irrupción en los escenarios políticos nacionales de procesos de magnitud continental (entre otros, por ejemplo, los llamados acuerdos de libre comercio), ligados en muchos casos a la penetración del capital transnacional, particularmente estadounidense, han resultado en la aparición y afirmación de experiencias de coordinación hemisférica en que confluyen movimientos sindicales, de mujeres, estudiantiles, ONGs, partidos políticos, colectivos antimilitaristas y agrupaciones de defensa del medio ambiente, en los que guardan un papel decisivo las organizaciones campesinas (particularmente a través de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo –CLOC– y su articulación internacional, Vía Campesina). La Campaña Continental contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), promovida por la Alianza Social Continental y otras redes y colectivos (así como en la arena global la constitución de la Red Internacional de los Movimientos Sociales), constituye quizás el ejemplo más destacado, al que se agrega la innumerable cantidad de encuentros regionales y continentales (que incluyen también a movimientos de América del Norte) contra el Plan Puebla Panamá y la militarización regional e intervención extranjera (particularmente en referencia a los llamados Plan Colombia e Iniciativa Andina), entre otras cuestiones. En este proceso, la constitución del Foro Social Mundial (FSM, 2001-2004) aparece como la experiencia más destacada de estas convergencias, no sólo a nivel internacional sino también continental y regional.

LA NUEVA CONFIGURACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS POPULARES

En este panorama que hemos reseñado brevemente en relación con las características que presenta la conflictividad social en América Latina en los últimos años, aparecen ya resaltadas algunas de las particularidades que distinguen la acción y conformación de los movimientos sociales y populares contemporáneos en nuestra región. El análisis de estas experiencias y, particularmente, el entendimiento y conceptualización de las novedades que dichos movimientos plantean en el decur-

so histórico de la acción colectiva y la contestación social constituyen uno de los centros de atención de la elaboración y revitalización del pensamiento social latinoamericano actual. La renovada generación de estudios y publicaciones sobre estas temáticas ha supuesto también la constitución de un nuevo campo de problemáticas así como un enriquecimiento de los marcos teóricos y metodológicos relacionados con el estudio de los movimientos sociales. Una de las manifestaciones de estas elaboraciones y de los debates planteados es, por ejemplo, el lugar que al interior del pensamiento crítico ha ocupado recientemente la discusión sobre la conceptualización del poder y el papel que le cabe al estado-nación en referencia a las visiones de la emancipación social promovidas por dichos movimientos⁶. No es, sin embargo, nuestra intención presentar los ejes problemáticos alrededor de los cuales se orientan los debates y las reflexiones de los científicos sociales –y de los propios movimientos⁷. En esta oportunidad nos interesa remarcar y profundizar algunas de las características que distinguen la configuración de los movimientos sociales en la actualidad.

En relación con ello, y respecto de los “repertorios de la protesta”, es importante destacar una tendencia a una mayor radicalidad en las formas de lucha, que se pone de manifiesto en la duración temporal de las acciones de protesta (acciones prolongadas o por tiempo indeterminado), en la generalización de formas de lucha confrontativas en desmedro de las medidas demostrativas, en la difusión regional de ciertas modalidades como los bloqueos de carreteras (característicos por ejemplo de la protesta de los movimientos de trabajadores desocupados en Argentina como de los movimientos indígenas y cocaleros del Área Andina), y en las ocupaciones de tierras (impulsadas por los movimientos campesinos) o de edificios públicos o privados. Por otra parte, la recurrencia de largas marchas y manifestaciones que atraviesan durante días y semanas los espacios regionales y nacionales parecen querer contrarrestar la dinámica de segmentación territorial promovida por el neoliberalismo. Asimismo, las puebladas y levantamientos urbanos aparecen como estrategias tendientes a la reapropiación colectiva del espacio comunitario y a la recupe-

6 Sobre este debate pueden consultarse, entre otros textos, los diferentes dossiers publicados en los números 12 y 13 de la revista *Chiapas*; así como aquellos incluidos en los números 4 y 7 de la revista *OSAL* de CLACSO.

7 Hemos abordado dicha cuestión en el curso “Neoliberalismo y movimientos sociales en América Latina: la configuración de la protesta social”, dictado en el marco de los cursos de formación a distancia, bajo la plataforma del Campus Virtual de CLACSO (2003).

ración de una visibilidad social denegada por los mecanismos de poder (Seoane y Taddei, 2003).

En relación con los sujetos sociales que parecen protagonizar este nuevo ciclo de protestas que intentamos analizar cabe resaltar dos características que ya señalamos precedentemente. La primera es el desplazamiento del conflicto asalariado al sector público, en desmedro del impacto e importancia que guardan los impulsados por los trabajadores del sector privado. Este hecho implica, a su vez, una configuración particular que atraviesa la acción de las organizaciones sindicales, en tanto la dinámica reivindicativa del sector público convoca a la participación y convergencia de otros sectores sociales en la defensa del acceso y calidad de la educación y la salud en tanto derechos ciudadanos. En este sentido es importante marcar que, en muchos casos, las luchas contra estas políticas de desmantelamiento y privatización, y el impulso de los procesos de convergencia –que adoptan las formas de coordinadoras y frentes cívicos–, no necesariamente reposan sobre la dinámica sindical asalariada, destacándose la importancia del papel jugado por otras organizaciones (movimientos campesinos, indígenas, desocupados, estudiantes, movimientos urbanos, entre otros) en la conformación de estas “coaliciones sociales amplias”. La segunda característica refiere a la consolidación de movimientos de origen rural –indígenas y campesinos– que alcanzan una significación e influencia nacional y regional. Los mismos desarrollan una notable capacidad de interpelación y articulación con sectores sociales urbanos, logrando vincular en muchos casos con éxito la dinámica de la lucha contra el neoliberalismo (política agraria, privatizaciones, ajuste fiscal) con un cuestionamiento más amplio de las bases de legitimidad de los sistemas políticos en la región.

Estos dos breves señalamientos –así como la descripción del escenario de la conflictividad social presentado anteriormente– nos permiten entonces profundizar la caracterización acerca de la configuración particular que parece distinguir la experimentación de los movimientos sociales contemporáneos en la región. Sin pretender agotar dicha cuestión, resulta necesario enfatizar, a nuestro entender, tres elementos que con distintas formas e intensidades parecen atravesar la práctica constitutiva de la mayoría de los más significativos movimientos sociales latinoamericanos.

En primer lugar, una dinámica de apropiación territorial que caracteriza la práctica colectiva de los que anteriormente hemos reseñado como movimientos territoriales rurales y urbanos. Presentada

como “la respuesta estratégica de los pobres a la crisis de la vieja territorialidad de la fábrica y la hacienda y a la desterritorialización productiva [impulsada por] las contrarreformas neoliberales” (Zibechi, 2003), así como al proceso de privatización de lo público y la política (Boron, 2003a), esta tendencia a la reapropiación comunitaria del espacio de vida donde se asientan dichos movimientos refiere a la expansión de las experiencias de autogestión productiva (Sousa Santos, 2002b), de la resolución colectiva de necesidades sociales (por ejemplo en el terreno de la educación y la salud) y de formas autónomas de gestión de los asuntos públicos. En este *continuum* diverso pueden abarcarse los asentamientos cooperativos del MST brasileño, las comunidades indígenas en Ecuador y Bolivia, los municipios autónomos zapatistas en México, los emprendimientos productivos de los diferentes movimientos de desocupados y el movimiento de fábricas recuperadas (ambos en Argentina), así como las puebladas y levantamientos urbanos que implicaron la emergencia de prácticas de gestión del espacio público (tal es el caso, por ejemplo, tanto de la “Guerra del Agua” en Cochabamba, Bolivia, como de la experiencia de las asambleas populares surgidas en los principales centros urbanos de Argentina *a posteriori* de diciembre de 2001). En este sentido, esta creciente “territorialización” de los movimientos sociales es el resultado tanto de la extensión de “formas de reciprocidad, es decir, de intercambio de fuerza de trabajo y de productos sin pasar por el mercado, aunque con una relación inevitable, pero ambigua y tangencial, con él [así como de] nuevas formas de autoridad política, de carácter comunal, que operan con y sin el estado” (Quijano, 2004). En tensión permanente con el mercado y el estado, extendidas en el tiempo o inestables y temporarias, asentadas en prácticas de “producción y reproducción de la vida” (Zibechi, 2003) u operando simplemente en el terreno de la gestión de lo público-político, esta dinámica de reapropiación colectiva del territorio social parece orientar la experiencia no sólo de los movimientos indígenas y campesinos sino también en el espacio urbano (Seoane, 2003a). En esta dirección podríamos afirmar que “la política antineoliberal pareciera encaminarse en una acción de [...] reproducción y producción de sociedad más allá de la producción ampliada y dislocada de los capitales transnacionales” (Tapia, 2000).

En consonancia con esta experiencia, la práctica y la discursividad de la mayoría de los movimientos sociales reseñados aparece atravesada por la revalorización de mecanismos democráticos de participación y decisión que, inspirados en las referencias de la democracia

directa o semidirecta, orientan tanto sus modelos organizativos como la programática y demanda hacia el estado. En este sentido, por un lado, la promoción de formas participativas más horizontales y abiertas es vista como reaseguro frente al peligro de “desconexión” entre los diferentes niveles organizativos, burocratización y manipulación. Por otra parte, la confrontación con la hegemonía neoliberal en el terreno de las políticas públicas se ha traducido en un creciente cuestionamiento al régimen político, al modelo de la democracia representativa y a la forma que adoptó la constitución del estado-nación en América Latina, promoviendo frente a este una diversidad de demandas que van desde la exigencia de consultas o referéndums hasta los reclamos de autonomía y autogobierno, impulsados particularmente por los movimientos indígenas. Las experiencias de autoorganización social vinculadas a formas asamblearias de organización fueron una característica de la emergencia de muchos de estos movimientos (por ejemplo de las organizaciones de trabajadores desocupados y las asambleas populares en Argentina o los levantamientos urbanos de la “Guerra del Agua” y la “Guerra del Gas” en Bolivia). Asimismo, las tradicionales experiencias de gestión comunitaria que caracterizaron a las comunidades indígenas, reformuladas bajo el impacto de las políticas neoliberales, han servido para plantear una mirada crítica y alternativa respecto de las formas delegativas y de representación. En ese terreno, la experimentación zapatista cristalizada en la voz del “mandar obedeciendo” (Ceceña, 2001) es quizás la más clara y sugerente, aunque no la única. Por otra parte, la utilización y presencia en la programática de muchos de estos movimientos de instrumentos de democracia semidirecta puede constatarse, por ejemplo, en la demanda del referéndum sobre el gas y la convocatoria a Asamblea Constituyente en las jornadas de octubre en Bolivia (2003), en los referéndums contra las privatizaciones en Uruguay, o en la exigencia de plebiscitos vinculantes sobre el ALCA que impulsan las coaliciones sociales constituidas en oposición a dicho acuerdo comercial a nivel continental. En la misma dirección, ya sea bajo la forma de la demanda de un estado plurinacional en el caso del movimiento indígena ecuatoriano, o en la exigencia y construcción del autogobierno en los municipios autónomos zapatistas, la reivindicación de la autonomía de los pueblos indios asumirá, en su proyección societal, la postulación de una democratización radical de las formas del estado-nación, particularmente de la “colonialidad del poder” que caracterizó su constitución (Lander, 2000). Por último, el acceso a gobiernos locales de representantes de

dichos movimientos (especialmente en la experiencia de las sierras ecuatorianas y el valle del Cauca en Colombia) ha supuesto la puesta en marcha de mecanismos de participación y control popular en la gestión de los mismos (Larrea, 2004). En la diversidad de las experiencias descritas anteriormente puede así señalarse la emergencia de una tendencia democratizadora que atraviesa la práctica colectiva de los movimientos sociales tanto en sus espacios de autonomía como en el terreno del estado (Seoane, 2004; Bartra, 2003a) y expresa la medida en que la “democracia participativa ha asumido una nueva dinámica protagonizada por comunidades y grupos sociales subalternos en lucha contra la exclusión social y la trivialización de la ciudadanía” (Sousa Santos, 2002a).

Por último vale señalar que, desde las protestas contra el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI, 1997-1998), la “Batalla de Seattle” que frustró la bautizada Ronda del Milenio de la Organización Mundial del Comercio (1999), la creación y profundización de la experiencia del Foro Social Mundial (FSM, 2001-2004) y las “jornadas globales” contra la intervención militar en Irak (2003-2004), la nervadura de un “nuevo internacionalismo” ha teñido de manera profunda y singular la experimentación de los movimientos sociales en la arena mundial. El carácter eminentemente social de los actores involucrados (aunque no desligado, por si hiciera falta la aclaración, de inscripciones ideológico-políticas), su heterogeneidad y amplitud, la extensión verdaderamente internacional de las convergencias, las formas organizativas y las características que asumen estas articulaciones, señalan la novedad de este internacionalismo (Seoane y Taddei, 2001). Como lo hemos reseñado ya, la región latinoamericana no ha sido ajena a este proceso. Por el contrario: la realización en 1996 del Primer Encuentro por la Humanidad y contra el Neoliberalismo organizado por el zapatismo en las profundidades de la selva chiapaneca –que puede ser considerada como una de las primeras convocatorias internacionales que se encuentran en el origen de este proceso–, así como el hecho de que el nacimiento del FSM alumbrara en la ciudad brasileña de Porto Alegre, señalan la profunda imbricación entre el crecimiento de la protesta y los movimientos sociales en América Latina y la emergencia de las convergencias globales contra la mundialización neoliberal. En esta región, a lo largo de los últimos años, estas experiencias han estado signadas particularmente por la evolución de los llamados acuerdos sobre liberalización comercial y especialmente de la iniciativa norteamericana de subsumir a los países de

la región bajo un área de libre comercio de las Américas (el ALCA). Estos procesos de resistencia, que supusieron tanto la constitución de espacios de coordinación a nivel regional (que agrupan a un amplio arco de movimientos, organizaciones sociales y ONGs) como el surgimiento de similares experiencias de convergencia a nivel nacional (por ejemplo las campañas nacionales contra el ALCA) resultan, en el marco continental y junto a la experiencia de los foros sociales y las movilizaciones contra la guerra, expresión y prolongación del movimiento altermundialista que emergió y se consolidó en la última década. En relación con este proceso de convergencias contra el “libre comercio”, la experiencia regional se remonta a las protestas que despertó la negociación y puesta en marcha (1994) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés), la creación de la Alianza Social Continental (1997), la organización de la Primera Cumbre de los Pueblos de las Américas (1998) en oposición a la Segunda Cumbre de Presidentes de los 34 países americanos que participan de la negociación del ALCA, y la organización de los Encuentros Hemisféricos contra el ALCA (La Habana, Cuba, 2002-2004). Sin embargo, particularmente en relación con la dinámica y características que asumen estas negociaciones a partir de 2003 –signadas por la proximidad de la fecha prevista para su finalización (2005), las dificultades y resistencias que enfrentan y la aceleración de los Tratados de Libre Comercio plurilaterales–, estos procesos de convergencia y protesta se intensifican a nivel regional⁸. Estas experiencias en Mesoamérica han fructificado en la creación y desarrollo de los Foros Mesoamericanos y del llamado Bloque Popular Centroamericano. En el caso de los países que integran el MERCOSUR, las llamadas “Campañas nacionales contra el ALCA” han impulsado diferentes y masivas consultas populares y han evolucionado hacia el creciente cuestionamiento del “libre comercio” de cara a las diferentes negociaciones comerciales que encaran los gobiernos. Finalmente, en el Área Andina la articulación entre el rechazo a estos tratados con masivas protestas en los espacios nacionales (por ejemplo, la “Guerra del Gas” en Bolivia, 2003) y la emergencia de procesos de coordinación regional (por ejemplo, en abril de 2004 se realiza la primera Jornada Andina de movilización contra el ALCA) señalan la riqueza de estos procesos. En esta dirección, la próxima realización del Primer Foro

8 Una evaluación de este proceso puede consultarse en OSAL (2004).

Social de las Américas en Ecuador (julio de 2004) habrá de constituirse en un punto de llegada de estas experiencias, así como en un acontecimiento que dará cuenta de la madurez, profundidad, características y desafíos que enfrenta el internacionalismo en el espacio latinoamericano y continental.

“NEOLIBERALISMO DE GUERRA” Y CONVERGENCIAS SOCIALES

El proceso abierto en América Latina en los últimos años –ante el agotamiento del modelo neoliberal tal cual este cristalizó trágicamente en la década del noventa en nuestra región– se expresa crecientemente en la intensificación de las disputas alrededor del rumbo que adoptará una transición cuyo resultado es incierto. En este sentido, la realidad sociopolítica de los diferentes países aparece signada, como lo señalamos anteriormente, por una renovada protesta social –que a nivel regional ha crecido en los últimos años– y la acción de movimientos sociales y populares con características diferentes de aquellos que habían ocupado el centro de la escena en el pasado inmediato. Este proceso, en el marco de la crisis económica que atravesó a la mayor parte de la región y frente a los intentos de profundizar las políticas neoliberales, se tradujo en algunos casos en “levantamientos populares” (que concluyeron, la mayoría de las veces, en derrumbes de gobiernos), en la constitución de “mayorías electorales” críticas al neoliberalismo, e incluso en la reaparición de una discursividad política que se diferencia del mismo. En su diversidad, estos procesos señalan la creciente crisis de legitimidad que cuestiona a las formas culturales, económicas y políticas que sostuvieron la aplicación del neoliberalismo en el pasado.

Sin embargo, de cara a este proceso, los intentos de profundizar las políticas neoliberales han tendido a la creciente militarización de las relaciones sociales en un proceso que ha sido bautizado como “neoliberalismo de guerra” (González Casanova, 2002; Taddei, 2002). El mismo no refiere solamente a la política de guerra y de intervención militar esgrimida como prerrogativa internacional por el presidente Bush –particularmente *a posteriori* de los atentados del 11 de septiembre de 2001– sino también a la profundización de un diagrama social represivo que abarca reformas legales que cercenan derechos y libertades democráticas y otorgan mayor poder e inmunidad al accionar de las fuerzas policiales, la criminalización de la pobreza y de los movimientos sociales, la llamada “judicialización” de la protes-

ta, el crecimiento de la represión estatal y paraestatal, y la creciente intervención de las Fuerzas Armadas en los conflictos sociales internos. Justificada bajo el pretendido combate al narcotráfico, el terrorismo o la delincuencia, la ideología de la “seguridad” pretende así la reconstitución de la cuestionada “gobernabilidad neoliberal”. Una de sus expresiones más trágicas ha sido el incremento de la presencia militar norteamericana a lo largo de toda la región latinoamericana (Quijano, 2004; Algranati, Seoane y Taddei, 2004). Asimismo, en el terreno de las políticas domésticas, el caso colombiano resulta uno de los laboratorios principales de la implantación de estos diagramas represivos, particularmente bajo la gestión del presidente Álvaro Uribe que abre un proceso que no sólo persigue profundizar el enfrentamiento militar con la guerrilla –luego de la ruptura de los acuerdos de paz del período anterior– sino también desplegar una política de “militarización social” en la tentativa de afirmar una legitimidad autoritaria, particularmente en los sectores urbanos de clases medias (Zuluaga Nieto, 2003). La faz del “neoliberalismo de guerra” acompaña así la promoción de una reconfiguración radical y aún más regresiva de la geografía política, social y económica de la región como resultado de la aceleración de los llamados “tratados de libre comercio” que tienen en el ALCA su máxima expresión.

Hemos intentado dar cuenta hasta aquí de los rumbos por los que transita y las características que adopta el proceso de disputa social y política abierto con la crisis del modelo neoliberal forjado en la década del noventa, y de las características que parecen signar la configuración de los movimientos sociales contemporáneos. Como hemos señalado, este proceso no resulta homogéneo y se expresa diferenciadamente en cada una de las regiones en las que puede subdividirse el continente e incluso al interior de las mismas. En este sentido, la evolución de la región norte (Mesoamérica y el Caribe) parece evidenciar una notoria consolidación de los procesos de liberalización comercial que constituyen la piedra angular de los planes estratégicos de Washington. Por otra parte, la convulsionada situación política en gran parte de la región andina es una manifestación de las fuertes tensiones sociales resultantes de los intentos de profundizar estos “nuevos” recetarios neoliberales que se traducen en la dificultad de estabilización de los regímenes políticos que impulsan estas políticas. Son expresiones de ello el creciente descrédito popular de los gobiernos de Perú y Ecuador; el escenario abierto con el “octubre boliviano” que proyecta en el horizonte nuevas confrontaciones y posibles cambios,

así como el caso venezolano, donde la batalla en torno al referéndum revocatorio presidencial para el próximo agosto cobrará sin lugar a dudas una dimensión regional. El desenlace de este proceso será fundamental en América Latina frente a las aspiraciones hegemónicas de la Casa Blanca de impedir la consolidación de procesos políticos democrático-populares que cuestionen el modelo neoliberal. En la región sur los movimientos sociales enfrentan el gran desafío de aprovechar los intersticios abiertos con la pérdida de legitimidad del neoliberalismo para disputar el rumbo de los procesos en curso, manteniendo y profundizando su autonomía en relación con los gobiernos.

Más allá de las particularidades que presentan los procesos a nivel subregional, la generalización del libre comercio aparece en todos los países (con excepción del caso venezolano) como un eje privilegiado por las elites políticas y económicas para refundar el orden neoliberal y su legitimidad. Frente a ello, los procesos de convergencia regional que a escala nacional impugnan el modelo económico hegemónico, y los horizontes emancipatorios que se desprenden de las prácticas y discursos que caracterizan a los movimientos sociales en los principios del siglo XXI, alumbran los contornos de esa “otra América es posible” que tanto reclaman nuestros pueblos.

BIBLIOGRAFÍA

- Algranati, Clara; Seoane, José y Taddei, Emilio 2004 “Disputas sociales y procesos políticos en América Latina” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 13, enero-abril.
- Bartra, Armando 2003a “De rústicas revueltas” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 10, enero-abril.
- Bartra, Armando 2003b “Descifrando la treceava estela” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 12, septiembre-diciembre.
- Boron, Atilio 2003a *Estado, capitalismo y democracia en América Latina* (Buenos Aires: CLACSO).
- Boron, Atilio 2003b *Imperio & Imperialismo. Una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri* (Buenos Aires: CLACSO).
- Ceceña, Ana Esther 2001 “Por la humanidad y contra el neoliberalismo, líneas centrales del discurso zapatista” en Seoane, José y Taddei, Emilio (comps.) *Resistencias Mundiales. De Seattle a Porto Alegre* (Buenos Aires: CLACSO).
- Chiapas* 2001 (México: IIE-UNAM/Era) N° 12.
- Chiapas* 2002 (México: IIE-UNAM/Era) N° 13.

- Coronado del Valle, Jaime 2002 “Democracia, ciudadanía y protesta social: la experiencia de Arequipa y la colonialidad del poder” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 8, septiembre.
- Dávalos, Pablo 2003 “Plurinacionalidad y poder político en el movimiento indígena ecuatoriano” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 9, enero.
- Fiori, José Luís 2001 *60 lições dos 90: uma década de neoliberalismo* (Rio de Janeiro: Record).
- González Casanova, Pablo 2002 “Democracia, liberación y socialismo: tres alternativas en una” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 8, septiembre.
- González Casanova, Pablo 2003 “Los ‘Caracoles’ zapatistas: redes de resistencia y autonomía” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 11, mayo-agosto.
- Lander, Edgardo (comp.) 2000 *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* (Buenos Aires: CLACSO).
- Larrea, Ana María 2004 “El Movimiento Indígena Ecuatoriano: participación y resistencia” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 13, enero-abril.
- Matte, Diane y Guay, Lorraine 2001 “La marcha mundial de las mujeres: por un mundo solidario e igualitario” en Seoane, José y Taddei, Emilio (comps.) *Resistencias Mundiales. De Seattle a Porto Alegre* (Buenos Aires: CLACSO).
- OSAL* 2001 (Buenos Aires: CLACSO) N° 4, junio.
- OSAL* 2002 (Buenos Aires: CLACSO) N° 7, junio.
- OSAL* 2003 (Buenos Aires: CLACSO) N° 11, mayo-agosto.
- OSAL* 2003 (Buenos Aires: CLACSO) N° 12, septiembre-diciembre.
- OSAL* 2004 (Buenos Aires: CLACSO) N° 13, enero-abril.
- Palau, Marielle 2002 “Luchas sociales obligan a retroceder al gobierno y detienen el proceso de privatización” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 8, septiembre.
- Petras, James 2000 *La izquierda contraataca. Conflicto de clases en América Latina en la era del neoliberalismo* (Madrid: Akal).
- Quijano, Aníbal 2004 “El laberinto de América Latina: ¿hay otras salidas?” en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* (Caracas: Universidad Central de Venezuela) Vol. 10, N° 1, mayo.
- Seoane, José 2003a “Los movimientos y las territorialidades sociales: el caso de la ‘Guerra del Agua’ en Cochabamba y las luchas contra las privatizaciones”, mimeo.
- Seoane, José (comp.) 2003b *Movimientos sociales y conflicto en América Latina* (Buenos Aires: CLACSO).
- Seoane, José 2004 “Rebelión, dignidad, autonomía y democracia. Voces compartidas desde el Sur” en *Chiapas* (Buenos Aires: CLACSO/IIE-UNAM/Ediciones Era) N° 16.

- Seoane, José y Taddei, Emilio (comps.) 2001 *Resistencias Mundiales. De Seattle a Porto Alegre* (Buenos Aires: CLACSO).
- Seoane, José y Taddei, Emilio 2003 “Movimientos sociales, conflicto y cambios políticos en América Latina” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 9, enero.
- Solón, Pablo 2003 “Radiografía de un febrero” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 10, enero-abril.
- Sousa Santos, Boaventura de (org.) 2002a *Democratizar a democracia, os caminhos da democracia participativa* (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira).
- Sousa Santos, Boaventura de (org.) 2002b *Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista* (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira).
- Stédile, João Pedro y Mançano Fernândes, Bernardo 2000 *Brava Gente: La trayectoria del MST y de la lucha por la tierra en el Brasil* (Buenos Aires: Madres de Plaza de Mayo/América Libre).
- Taddei, Emilio 2002 “Crisis económica, protesta social y ‘neoliberalismo armado’ en América Latina” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 7, junio.
- Tapia, Luis 2000 “La crisis política de abril” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 2, septiembre.
- Zibechi, Raúl 2003 “Los movimiento sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 9, enero.
- Zuluaga Nieto, Jaime 2003 “Colombia: entre la democracia y el autoritarismo” en Seoane, José (comp.) *Movimientos sociales y conflicto en América Latina* (Buenos Aires: CLACSO).